

Señor

**JUEZ CONSTITUCIONAL (REPARTO)**

Bogotá, D.C.

E.

S.

D.

**REF: ACCION DE TUTELA POR VIAS DE HECHO**

ACCIONANTE: ESPERANZA BEJARANO BALCERO  
C.C. No. 51.612.616

ACCIONADO: JUEZ SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO  
ESPECIALIZADO DE BOGOTA – EXTINCION DE  
DOMINIO.

PROCESO: No. 1100131200022017052-2 – N.I. 11713 E.D.

**ESPERANZA BEJARANO BALCERO**, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.612.616 de Bogotá, actuando en mi propio nombre y en representación de mis intereses hago la siguiente petición:

Con el debido respeto manifiesto que interpongo **ACCION DE TUTELA**, consagrada en el Artículo 86 de la Constitución Nacional, como **MECANISMO TRANSITORIO PARA EVITAR UN PERJUICIO IRREMEDIABLE**, contra el **JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE BOGOTA – EXTINCION DE DOMINIO**, para que tutelen mis derechos fundamentales.

La presente **ACCIÓN DE TUTELA** se fundamenta en los siguientes

**HECHOS**

***"Los hechos materia de la presente investigación tuvieron ocurrencia el pasado 8***

***de Febrero del año 2012, cuando miembros de la Policía Nacional, recibieron información de la ciudadanía donde les informaron que en el inmueble ubicado en la Diagonal 60 Sur No. 3B-12 Este - Localidad de Usme, expendían sustancias estupefacientes. Verificada la información el 23 de Febrero del año 2012, se llevó a cabo diligencia de registro y allanamiento a cargo del Capitán NELSON VANEGAS, cuyo resultado fue la incautación de dos (2) armas de fuego halladas al interior del inmueble de madera en la habitación principal de la vivienda, a saber, un revólver marca Llama Marial, con número interno 25864 y 5 cartuchos y un revólver marca Detective calibre 38 con 4 cartuchos. Igualmente fueron hallados en el interior del inmueble 31 cápsulas transparentes contentivas de una sustancia pulverulenta, que por su olor y color se asemeja al bazuco y como ninguna de las personas presentes se hizo responsable.***

***Mediante prueba de laboratorio se estableció que las armas incautadas y sus cartuchos son aptas para disparar y la sustancia incautada correspondió a cocaína con un peso neto de 10.9 gramos. Por los anteriores hecho se judicializó a la Señora ESPERANZA BEJARANO BALCERO”.***

## **PETICION**

Teniendo en cuenta lo anterior se estructuran causas razonables para que su Despacho me haga valer los derechos fundamentales vulnerados, ordenando al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, D.C. (Extinción de

Dominio), a fin de que revoque la Providencia proferida el 26 de Enero del año 2018 y excluirme de toda responsabilidad administrativa en el Proceso de Extinción de Dominio radicado en dicho Despacho bajo el No. 1100131200022017052 – N.I. 11713 E.D.

### **PRUEBAS**

1. Registro de Inscripción como adulto mayor, en que consta que la suscrita no recibo ninguna ayuda de ninguna entidad del Estado, ni tengo bienes muebles ni inmuebles.
2. Múltiples firmas de los vecinos, haciendo constar que la suscrita vive en la Vereda Panamá – Sector El Molino de Soacha (Cund.).
3. Contrato de arrendamiento suscrito entre **ESPERANZA BEJARANO BALCERO** e **ISIDRO SANTANA**.
4. Certificación catastral.
5. CD contentivo de Historia Clínica de la suscrita **ESPERANZA BEJARANO BALCERO**.

**OFICIO:** Solicito al Señor Juez se sirva oficiar al Juzgado 2º Penal del Circuito Especializado de Bogotá, D.C. – Extinción de Dominio, a fin de que remita la Sentencia proferida por ese Despacho, en que me extinguió los derechos de mi propiedad del inmueble dentro del Radicaco de la referencia.

### **JURAMENTO**

Además manifiesto bajo juramento que no he recurrido a ningún otro medio ni he interpuesto acción similar ante otros

Despachos Judiciales, por ello recurro ante el suyo, ya que me encuentro habilitado para ello.

### **FUNDAMENTOS DE DERECHO**

Cito los Artículos 1º, 2º, 5, 13, 23, 29, 85, 86 y 228 de la C.N., en armonía con los Arts. 7º, 18, 23, 25, 52 del Decreto 2591/91; y demás normatividad vigente, pertinente y concordante. Tratados Internacionales, Convención Interamericana de Derechos Humanos, Art. 4º Debido Proceso y del 8 al 14. Igualmente los Tratados de Derechos Civiles y Políticos de San José de Costa Rica de los Artículos 6 al 10. De otra parte Art. 93 de la Constitución Nacional.

La presente **ACCION DE TUTELA**, la interpongo por violación al **DEBIDO PROCESO** y a garantías mínimas fundamentales contenidas en la Constitución Nacional y conforme el Artículo 86 que preestablece: **COMO MECANISMO TRANSITORIO PARA EVITAR PERJUICIOS IRREMEDIABLES**, que a la letra dice: **"ESTA ACCIÓN SOLO PROCEDE CUANDO EL AFECTADO NO DISPONGA DE OTRO MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL, SALVO QUE SE UTILICE COMO MECANISMO TRANSITORIO PARA EVITAR UN PERJUICIO IRREMEDIABLE"**, concordante al Decreto 2591 de 1991, con fundamento en los hechos que han dado origen a lo reclamado.

El Artículo 5º de la Constitución Nacional, que dice: **"EL ESTADO RECONOCE SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA LA PRIMACÍA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES INALIENABLES DE LA PERSONA"**, como la dignidad humana y el derecho al buen nombre y al mínimo vital, esto es en

relación a mis bienes, para que me protejan el derecho a la propiedad y vivienda.

Con base en lo anterior, solicito se **TUTELEN** mis Derechos Fundamentales Constitucionales y Legales, **REVOCANDO** la decisión tomada por el Juzgado 2º Penal del Circuito Especializado – Extinción de Dominio.

### **NOTIFICACIONES**

**EL JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO – EXTINCION DE DOMINIO** de la ciudad de Bogotá, D.C., en la Calle 31 No. 6-20 de Bogotá, D.C.

La suscrita en la Calle 15 A Sur No. 12-35 de Soacha  
(Compartir)

Atentamente,

*Esperanza Bejarano Balcera*  
**ESPERANZA BEJARANO BALCERO**

C.C. No. 51.612.616 de Bogotá

Señor:

JUEZ CONSTITUCIONAL

Bogotá, D.C.

E.

REF: PROCESO No. : \_\_\_\_\_

PROCESADA : ESPERANZA BEJARANO BALCERO

DELITO : EXTINCION DE DOMINIO

Los abajo firmantes, residentes del barrio Los Manzanos Veredal Panama hacemos constar que conocemos de vista, trato y comunicación desde hace más de cinco (5) años, a la señora **ESPERANZA BEJARANO BALCERO**, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Bogotá, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51612616 de Bogotá, quien reside en la Veredal Panama, demostrando ser una persona de sanas costumbres, honrada y trabajadora, cumplidora de sus deberes sociales, familiares y vínculos con la comunidad, etc., razón por la cual la recomendamos ampliamente.

Rogamos a usted prestarle la colaboración, atención y ayuda que a bien tenga.

Para ello nos suscribimos:

Marta Lucia Lucado

NOMBRE: Marta Lucia Lucado  
C.C. No. 51781125  
TELEFONO: 319 437 6608

Edgar Alejandro Baez Duitama

NOMBRE: Edgar Alejandro Baez  
C.C. No. 80986664  
TELEFONO: 312 316 9605

Leidy Giseth Martin

NOMBRE: Leidy Giseth Martin  
C.C. No. 1000696102  
TELEFONO: 310 7735792

Daniel Correa

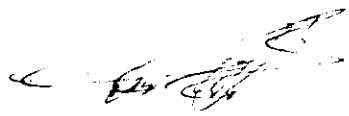
NOMBRE: Daniel Correa  
C.C. No. 1022954899  
TELEFONO: 313 4466005


Gina Paola Velobez

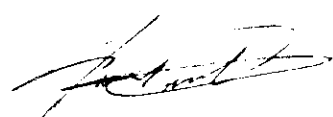
NOMBRE: Gina Paola Velobez  
C.C. No. 1033729614  
TELEFONO: 313 4910097

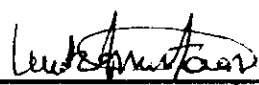
Cristian Andres Martinez

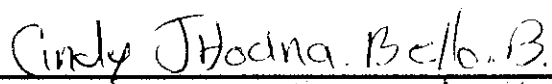
NOMBRE: Cristian Andres Martinez  
C.C. No. 1031148940  
TELEFONO: 3204347380


  
NOMBRE: Juan Camilo Baez  
C.C. No. 80759624  
TELEFONO: 3112692319

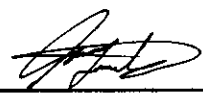
  
NOMBRE: Jakelin bello bejarano  
C.C. No. 1024558920  
TELEFONO: 322457194

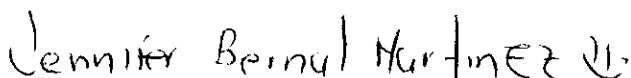
  
NOMBRE: Jose Robisen Sanchez G  
C.C. No. 79922487  
TELEFONO: 3103461383

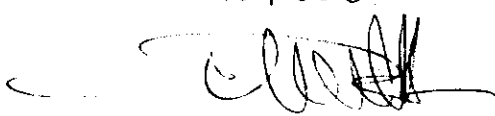
  
NOMBRE: Luiz Antonio bello  
C.C. No. 19215119  
TELEFONO: 3209151449

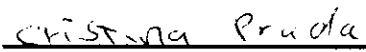
  
NOMBRE: Cindy Jhoana bello  
C.C. No. 1073686429  
TELEFONO: 3016237650


  
NOMBRE: Jhon Jairo avila  
C.C. No. 79218005  
TELEFONO: 3776853

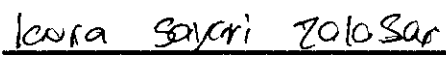
  
NOMBRE: Isidro santana  
C.C. No. 3028813  
TELEFONO: 3006306898


  
NOMBRE: Jennifer Beiral Martinez V.  
C.C. No. 53167331  
TELEFONO: 3108691580


  
NOMBRE: Oscar Soler Alfo  
C.C. No. 1030556224  
TELEFONO: 3002333131

  
NOMBRE: Cristina Prada  
C.C. No. 28846499  
TELEFONO: 3213485464

  
NOMBRE: Pablo Antonio Chacon S.  
C.C. No. 7204211  
TELEFONO: 3202132039

  
NOMBRE: Laura Sayari Zolosa  
C.C. No. 101416715  
TELEFONO: 3924264368

  
NOMBRE: Luz Marina Baez Dufrenoy  
C.C. No. 7082460  
TELEFONO: 3118107711

  
NOMBRE: Pablo Andres Chacon B  
C.C. No. 618427083  
TELEFONO: 3153743398

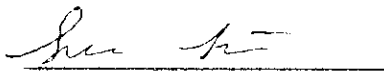
1/FEBRERO/2019

## Contrato de arrendamiento

Conste por el presente documento el contrato de arrendamiento que celebran de una parte Esperanza Bejarano identificada con c.c 51612616 expedida en Bogotá domiciliada en la vereda panamá sector el molino del municipio de Soacha Cundinamarca en Adelante el **arrendador** Isidro Santana identificado con c.c 3028813 de Gachancipa Cundinamarca.

En Adelante del **arrendatario** en los términos siguientes:

- Se le da en calidad de arriendo una casa de tres piezas, cocina, baño y sala por un valor de arrendamiento de \$200.000 pesos colombianos ubicada en la vereda panamá sector el molino del municipio de Soacha pagaderos en los primeros 5 días de cada mes.
- Los servicios públicos como luz, agua, parabólica los pagara el arrendatario .
- Por cláusula de incumplimiento por alguna de las partes se pacta \$500.000 pesos colombianos.



Firma del arrendador

C.C 3028813

3006386898



Firma del arrendatario

C.C 51612616

3143460546





ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Unidad Administrativa Especial  
Catastro Distrital

Bogotá, D.C., Enero 28 del 2020

Referencia: Radicación No. 2020-56455

**EL GERENTE COMERCIAL Y DE ATENCION AL USUARIO DE LA UAEC**

**CERTIFICA:**

Que consultado el Sistema Integrado de Información Catastral S.I.I.C.

**ESPERANZA BEJARANO BALSERO, C.C. 51612616**

Se encontró inscrito en el archivo magnético de la U.A.E.C.D como propietario(a) de bienes inmuebles en el Distrito Capital.

Adjunto Un (1) certificado con la información correspondiente.

La inscripción en Catastro no constituye título de dominio, ni sana los vicios que tenga una titulación o una posesión, Resolución No. 070/2011 del IGAC.

MAYOR INFORMACIÓN: <https://www.catastrobogota.gov.co/solicitudes-peticiones-quejas-reclamos-y-denuncias>. Punto de Servicio: SuperCADE. Tel. 2347600 Ext 7600

LIGIA ELVIRA GONZALEZ MARTINEZ

GERENTE COMERCIAL Y ATENCION AL USUARIO

\* Para verificar su autenticidad, ingrese a [www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co) Catastro en línea opción Verifique certificado y digite el siguiente código: 78CE3DD2F521





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
HACIENDA  
Unidad Administrativa Especial de  
Catastro Distrital

# Certificación Catastral

Radicación No.: 56455

Fecha: 28/01/2020

ESTE CERTIFICADO TIENE VALIDEZ DE ACUERDO A LA LEY 527 de 1999 (Agosto 18)

Directiva Presidencial No.02 del 2000, Ley 962 de 2005 (antitrámites) artículo 6, parágrafo 3. Pagina: 1 de 1

## Información Jurídica

Número Propietario	Nombre y Apellidos	Tipo de Documento	Número de Documento	% de Copropiedad	Calidad de Inscripción
1	ESPERANZA BEJARANO BALSERO	C	51612616	100	SI

Total de Propietarios: 1

## Documento soporte para inscripción

Tipo	Número	Fecha	Ciudad	Despacho	Matrícula Inmobiliaria
6	1	01/01/1900	BOGOTÁ D.C.	01	050S00000000

## Información Física

**Dirección oficial (Principal):** Es la dirección asignada a la puerta más importante de su predio, en donde se encuentra instalada su placa domiciliaria.

**DG 62 SUR 2 70 MJ - Código postal: 110521**

**Dirección secundaria y/o incluye:** "Secundaria" es una puerta adicional en su predio que está sobre la misma fachada e "Incluye" es aquella que esta sobre una fachada distinta de la dirección oficial

**DG 62 SUR 2 68**

**Dirección(es) anterior(es):**

**DG 60 SUR 3B 12 ESTE MJ FECHA:22/08/2013**

**DG 60 S 3B 12 E MJ 1 FECHA:31/12/2009**

**Código de Sector Catastral** 002597 16 08 001 00000  
**Cédula(s) Catastral(es):** 202302160800100000  
**CHIP:** AAA0172EDYN  
**Número Predial Nal:** 110010125059700160008501000000

**Destino Catastral:** 01 RESIDENCIAL

**Estrato:** 1 **Tipo Propiedad:** PARTICULAR

**Uso:** 001 HABITACIONAL MENOR O IGUAL A 3 PISOS NPH

**Total Área Terreno**  
0

**Total Área construcción**  
126.85

## Información Económica

Años	Valor Avalúo catastral	Año Vigencia
1	\$38,359,000.00	2020
2	\$35,619,000.00	2019
3	\$27,209,000.00	2018
4	\$37,598,000.00	2017
5	\$35,619,000.00	2016
6	\$37,186,000.00	2015
7	\$35,207,000.00	2014
8	\$19,780,000.00	2013
9	\$20,349,000.00	2012

La inscripción en Catastro no constituye título de dominio, ni sanea los vicios que tenga una titulación o una posesión, Resolución No. 070/2011 del IGAC.  
MAYOR INFORMACIÓN: <https://www.catastrobogota.gov.co/solicitudes-peticiones-quejas-reclamos-y-denuncias>. Punto de Servicio: SuperCADE. Tel. 2347600 Ext 7600

EXPEDIDA, A LOS 28 DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020

**LIGIA ELVIRA GONZALEZ MARTINEZ**  
GERENTE COMERCIAL Y ATENCION AL USUARIO

\* Para verificar su autenticidad, ingrese a [www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co). Catastro en línea opción Verifique certificado y digite el siguiente código: 78CE3DD2F521



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA



JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE  
EXTINCIÓN DE DOMINIO DE BOGOTÁ

Bogotá D. C., Veinticinco (25) de octubre de dos mil diecisiete (2017)

Radicado:	11001-31-20-002-2017-052-2
Afectados:	ESPERANZA BEJARANO BALCERO
Decisión:	PRUEBAS
AUTO INTERLOCUTORIO	No. 085

1. ASUNTO POR TRATAR

Procede el Despacho a pronunciarse, respecto de la solicitud hecha dentro del término de traslado previsto en el artículo 141 de la Ley 1708 de 2014 por parte del Curador Ad Litem, doctor MAURICIO MORENO SUPELANO.

2. HECHOS Y ANTECEDENTES RELEVANTES.

2.1. Se desprende del acto de requerimiento:

"Tienen su origen las presentes diligencias en el oficio No. 011972/SIJIN-LAVAC-29 del trece (13) de marzo de dos mil doce (2012), suscrito por el teniente Fabián Esteban Cuadros Vargas, Jefe de la Unidad Investigativa de Extinción de Dominio SIJIN-MEBOG, mediante el cual solicitó iniciarte el trámite de extinción de dominio sobre el referido inmueble en el que se realizó diligencia de allanamiento y registro, lográndose la captura de dos ciudadanas, por la presunta comisión del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes."

Radicación : 11001 31 20 002 2017-052-2  
Afectado : Esperanza Bejarano Balcer  
Trámite : Extinción de dominio

Auto interlocutorio No. 085  
LEY 1708 DE 2014

lo que no se requiere de su participación en el proceso. No obstante, seguidamente solicitó que, se escuche en declaración a la propietaria del bien objeto de estas diligencias, señora ESPERANZA BEJARANO BALCERO, para que informe si en el citado inmueble habitan menores de edad, dado que en el certificado de libertad y tradición aparecen sendas anotaciones de afectación a vivienda familiar y constitución a patrimonio de familia, porque de ser así, no procedería la extinción de dominio dado los intereses superiores del menor.

#### 4. CONSIDERACIONES

La Ley 1708 de 2014 establece el procedimiento especial que rige el trámite de la acción de extinción de dominio, y es a él al que debemos remitirnos; así pues, en lo relacionado con la actuación del juez tenemos que, el artículo 141 de la mencionada normatividad, prevé la obligación de correr traslado a los intervinientes para que formulen causales de incompetencia, impedimentos, recusaciones o nulidades, aporten o soliciten pruebas o formulen observaciones sobre el requerimiento presentado por la Fiscalía.

Ahora bien, como se desprende de la foliatura, dentro de dicho término el Curador Ad Litem solicitó la práctica de pruebas sin que formulara observaciones al acto de requerimiento presentado por la Fiscalía Delegada, razón por la cual el Despacho entrará a pronunciarse sobre las peticiones de prueba.

##### 4.1. De los medios probatorios

Frente a este tema, se debe decir que, el artículo 142 de la Ley 1708 de 2014, estableció la posibilidad de que el juez ordene y practique, "las pruebas que no hayan sido recaudadas en la fase inicial, siempre y cuando resulten pertinentes, conducentes y necesarias y hayan sido solicitadas de manera oportuna"; igualmente, debe ordenar tener como tales aquellas aportadas por las partes si cumplen los requisitos acabados de mencionar y si fueron obtenidos por ellas legalmente. También puede de manera oficiosa y motivada ordenar pruebas que sean pertinentes, conducentes y necesarias.



Radicación : 11001 31 20 002 2017-052-2  
Afectado : Esperanza Bejarano Balceró  
Trámite : Extinción de dominio

Auto interlocutorio No. 085  
LEY 1708 DE 2014

hechos que sean materia de discusión dentro del proceso de extinción de dominio deberán ser probados por la parte que esté en mejores condiciones de obtener los medios de prueba necesarios para demostrarlos, circunstancia excepcional a la regla general según la cual la Fiscalía tiene la carga de identificar, ubicar, recolectar y aportar los medios de prueba que demuestran la concurrencia de alguna de las causales previstas en la ley para la declaratoria de extinción de dominio y que el afectado no es titular de buena fe exenta de culpa.

En efecto, las anteriores facultades probatorias para el perjudicado y los demás sujetos procesales, como se mencionó, están supeditadas al cumplimiento de unas exigencias para su procedencia; entre ellas que sean conducentes, pertinentes y útiles, al respecto señaló la Corte Suprema de Justicia en decisión del 8 de agosto de 2016 (CSJ AP5094-2015, rad. 47494):

*Para adoptar las decisiones sometidas a su consideración, la Corte atenderá la expresa referencia a la procedencia de las pruebas, efectuada en el artículo 400 de la Ley 600 de 2000, aspecto que, como se ha precisado, guarda relación con los conceptos de conducencia, pertinencia, racionalidad y utilidad del elemento probatorio.*

*A partir de ellos, la Sala ha considerado, entre otros, que una prueba es conducente cuando su práctica es permitida por la ley como elemento demostrativo para que el funcionario judicial forme su juicio sobre la materialidad de la conducta investigada o la responsabilidad del procesado. Es pertinente cuando guarda relación con los hechos, objeto y fines de la investigación y juzgamiento y, además, resulta apta y apropiada para demostrar un tema de interés en el trámite. La racionalidad se relaciona con la viabilidad real de su práctica dentro de las circunstancias materiales que demanda su realización y, finalmente, es útil, cuando reporta algún beneficio, por oposición a lo superfluo o innecesario (CSJ SP, 17 marzo 2004, Rad. 22053; CSJ SP, 30 noviembre 2006, Rad. 26397).*

*Además, la Corte tiene dicho que para la pertinencia, procedencia y utilidad de los elementos de convicción pedidos en la etapa del juicio, resulta necesario remitirse al marco fáctico y jurídico de la imputación, delimitado en el pliego de cargos.*

*Por tanto, las pruebas pedidas en la etapa del juicio, además de procedentes, deben contribuir al esclarecimiento de los hechos y tener propósito claro en relación con los aspectos relevantes bien sea de la imputación, la responsabilidad del procesado, su imputabilidad, según se hayan concretado en la acusación (CSJ SP, 23 en. 2008,*

Radicación : 11001 31 20 002 2017-052-2  
Afectado : Esperanza Bejarano Balcerio  
Trámite : Extinción de dominio

Auto interlocutorio No. 085  
LEY 1708 DE 2014

puesto que el inmueble objeto de extinción de dominio le aparecen en su certificado de libertad anotación de constitución a patrimonio de familia lo que impediría el proceso de extinción de dominio conforme a los artículos 13 y 44 de la Constitución Política, que dan al menor especial protección, prevaleciendo sobre los demás.

Ahora bien, indíquesele al profesional que, las argumentaciones esbozadas en su escrito relacionadas con las razones por las que no se debe extinguir el derecho de dominio del bien de sus representados terceros e indeterminados, serán analizadas en el momento procesal correspondiente, pues esta etapa procesal solamente está prevista para los fines del artículo 141 de la ley 1708 de 2014, es decir, para solicitar o aportar pruebas o para formular observaciones al requerimiento de la Fiscalía.

Aunado a lo anterior debe tenerse en cuenta que, este proceso no busca establecer condiciones personalísimas de los titulares del derecho de dominio, sino únicamente su posible vinculación o no con una causal de extinción de dominio, aspectos respecto de los cuales no se evidencia su esclarecimiento con la práctica de la prueba deprecada; en otras palabras, es claro que el objeto de la prueba no busca establecer el tema de prueba plasmado por la Fiscalía en su requerimiento de extinción, es decir, frente a la desfinación ilícita. Por lo que se denegará por impertinente.

#### 4.4. Pruebas de oficio

Por el momento no se decretarán pruebas de oficio.

En mérito de lo expuesto, el JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE BOGOTÁ D.C.,

**RESUELVE:**

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA



JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE  
EXTINCIÓN DE DOMINIO DE BOGOTÁ

Bogotá D. C., veintiséis (26) de enero de dos mil dieciocho (2018).

Radicado:	11001-31-20-002-2017-0032
Afectado:	Esperanza Bejarano Balcer
Decisión:	Extinción Dominio
Sentencia:	No. 004

1. ASUNTO A TRATAR

Proferir la sentencia que en derecho corresponda dentro del proceso de extinción de dominio que se adelanta sobre el bien ubicado en la diagonal 60 sur No. 36-12 este, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 0503-40073705, que figure a nombre de la señora Esperanza Bejarano Balcer una vez verificada la inexistencia de vicio alguno que pueda invalidar la actuación procesal.

2. SITUACIÓN FÁCTICA QUE DIO ORIGEN AL PROCESO

Dan cuenta las diligencias, que a raíz de varias denuncias de los habitantes del sector, según las cuales en el inmueble objeto de las diligencias se comercializaban sustancias estupefacientes, se ordenó el allanamiento y registro en el mismo, diligencia que se llevó a cabo el 28 de febrero de 2012, durante la cual los policiaes encontraron en la habitación principal, en un mueble de madera dos (2) armas de fuego tipo revólver con cartuchos para los mismos y 31 cápsulas plásticas transparentes contentivas de una sustancia que arrojó un resultado preliminar positivo para cocaína luego de ser sometida a la prueba de PPH, siendo capturadas por esos hechos las señoras Esperanza Bejarano Balcer (propietaria del predio) y su hija Leidy Patricia Laram Bejarano<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Folio 83 del cuaderno original de la actuación principal  
<sup>2</sup> Folio 18 ibídem



Surtido el anterior trámite, y ante la no comparecencia de terceros y personas indeterminadas, fue designado y posesionado como curador ad litem el Dr. Mauricio Moreno Supelano, quien se posesionó para ejercer dicho cargo el 7 de marzo de 2016 a quien se le notificó personalmente la resolución de admitir y a la vez se corrió traslado para solicitudes probatorias<sup>1</sup>.

Así las cosas, la Fiscalía Delegada mediante resolución de 29 de marzo de 2016 decretó la práctica de pruebas<sup>2</sup>.

Concluido el término probatorio, se cerró el proceso / se ordenó correr traslado para que los sujetos procesales alegaran de conclusión<sup>3</sup>. Oportunito en la cual el curador ad litem solicitó que se tuviera en cuenta las obligaciones de la señora Esperanza Bejarano Balcerro, según las cuales desconocía lo que ocurría en su bien<sup>4</sup>. Surtido lo anterior, el instructor mediante resolución de 19 de diciembre de 2016, declaró la PROCEDENCIA de la acción de extinción de dominio sobre el bien objeto de pronunciamiento<sup>5</sup>.

Dicha determinación fue objeto de apelación por parte del curador ad litem<sup>6</sup> solicitud resuelta por la Fiscalía Segunda Delegada ante la Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dependencia que a través de resolución emitida el 20 de junio de 2017 se abstuvo de evacuar la alzada, teniendo en cuenta que el profesional carecía de legitimación por no ser el representante legal de la afectada, sino de terceros e indeterminados de los que resaltó, no se determinaron ni comparecieron a la actuación; concluyendo entonces que carecía de interés para recurrir<sup>7</sup>.

Ejecutoriada la resolución de procedencia, el asunto fue remitido a los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Extinción de Dominio, con esponsión por reparto a este Despacho, en el que se procedió a anotar el consentimiento de la actuación mediante auto de 16 de agosto de 2017 y correr el traslado del

<sup>1</sup> Folios 152 y 153 ibidem

<sup>2</sup> Folio 154 ibidem

<sup>3</sup> Resolución de 7 de octubre de 2016 obrante a folio 213 ibidem

<sup>4</sup> Folio 214 del cuaderno original de la actuación principal

<sup>5</sup> Folio 219 ibidem

<sup>6</sup> Folio 229 ibidem

<sup>7</sup> Folio 10 del cuaderno original de segunda instancia.





Para arribar a dicha conclusión, señalo que indiscutiblemente el predio fue utilizado para la comisión de un delito, pues en el mismo se almacenaron armas de fuego y sustancia estupefaciente, lo que está soportado en los diferentes informes policiales, situación delictiva que fue aceptada por la señora Esperanza Bejarano Balcerro, razón por la que fue condenada a una pena de prisión. Hago alusión a las contradicciones de la afectada en su declaración sobre su supuesto desconocimiento acerca de los hechos, las que reflejan un desinterés y desdén para con el mismo, pues a pesar de saber que su hija al parecer era consumidora de sustancias estupefacientes no hizo nada para evitar un indebido uso de la casa, sin perder de vista que adujo permanecer en la casa entre semana, lo que le permitía ejercer control sobre su bien y las actividades de su hija. Circunstancias a partir de las cuales concluyó que se incumplió la función social de la propiedad. Finalmente explicó al curador ad litem las razones por las cuales figuras como el patrimonio de familia hereditario no son óbice para que impida declarar la extinción del derecho de dominio.

## 5. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

### 5.1. Competencia.

En atención a la solicitud de extinción de dominio presentada por la FISCULA, es pertinente reiterar que, tal como se indicó en el ya citado auto de 16 de agosto de 2017, el presente asunto, se rige bajo los parámetros de la Ley 1708 de 2014, disposición procesal que se encuentra vigente en la actualidad en lo que tiene que ver con el trámite de extinción de dominio, tras haber derogado tanto explícita como implícitamente las normas anteriores, y en consecuencia es la normatividad que tendrá en cuenta este Juzgado para resolver el caso en estudio.

En ese orden de ideas, en lo que se refiere a la competencia de este Juzgado para conocer del *sub iudice*, es importante atender las previsiones del artículo 35 del Código de Extinción de Dominio de 2014, el cual prescribe:

**ARTÍCULO 35. COMPETENCIA TERRITORIAL. PARA EL JUZGAMIENTO.** Corresponde a los Jueces del Circuito Especializados en



sentencia, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para su titular.

Esta figura jurídica, regulada por la Ley 1728 de 2014 (anteriormente lo estaba por la Ley 793 de 2002, modificada por la 1453 de 2011), encuentra fundamento en el inciso 2º del artículo 34 de la Constitución Nacional, que prescribe que por sentencia judicial, se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento lícito, en perjuicio del tesoro público o, con grave deterioro de la moral social.

En la sentencia C-740 de 28 de agosto de 2003, que declaró exequibles, con contadas excepciones, el contenido de los artículos que conformaban la Ley 793 de 2002 –antigua normatividad que regía este tipo de trámites–, se hizo referencia por la Corte Constitucional, a las características de esta acción, entre las que encontramos su autonomía respecto del derecho penal, así se indicó por la Corporación:

*"Es una acción autónoma e independiente tanto del derecho penal como del derecho civil. Lo primero, porque no es una pena que se impone por la comisión de una conducta punible sino que depende independientemente del juicio de culpabilidad de que sea o no culpable el afectado. Y lo segundo, porque es una acción que no está motivada por intereses patrimoniales sino por intereses superiores de Estado. El hecho de extinción del dominio lícitamente adquirido no es un mandato que se circunscribe a la órbita patrimonial del particular afectado, con su afianzamiento, pues, lejos de ello, se trata de una institución asistida por un legítimo interés público."* (Corte Constitucional C-740 de 2003)

Por su parte, el artículo 18 del actual Código de Extinción de Dominio (Ley 708 de 2014) determina que la acción de Extinción de Dominio es distinta y autónoma de la penal, así como de cualquiera otra, e independiente de toda declaración de responsabilidad; igualmente dispone que, en ningún caso procederá la prejudicialidad para impedir que se profiera sentencia, ni excepciones distintas a las previstas en esta ley.



Al respecto, de manera reciente la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ AP 6957-2016, rad.48945), en providencia de 12 de octubre de 2016, mediante la cual dirimió una colisión negativa de competencia suscitada entre los Juzgados Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá y Cali, quienes rehusaban emitir fallo sobre un requerimiento de improcedencia de extinción de dominio presentado por la Fiscalía, precisó:

*Lo anterior por cuanto en criterio de la Corte el régimen de transición contemplado en la Ley 1708 de 2014, solo está referido a las causales de extinción de dominio legalmente contempladas al dictar la resolución de mérito, y no comprende las restantes normas sustanciales o procesales contenidas en los regímenes anteriores que han regulado el tema, tal como lo concluyó en pasado pronunciamiento (CSJ AP4553-2016, rad. 46545), previa esta consideración:*

(...)

*Es claro que la Ley 1708 de 2014, que rige desde el 20 de julio de 2014, aplica desde ese entonces, además, porque derogó expresamente las 2101 las Leyes 793 y 785 de 2002, Ley 1330 de 2009, así como las demás leyes que las modifican o adicionan, y también las leyes que sean contrarias o incompatibles con este Código.*

En precedencia la Alta Corporación ya se había ocupado del tema, en la cual avizoró lo ahora plasmado como *ratio decidendi*, en aquella oportunidad la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ AP 4563-2016 rad 46548), indicó

*La extinción del derecho de dominio y el procedimiento para hacerla efectiva fueron inicialmente regulados por la Ley 393 de 1993, posteriormente derogada por la Ley 793 de 2002. Esta última fue objeto de varias modificaciones introducidas por las Leyes 1395 de 2010 y 1458 de 2011. Finalmente fue sustituida por la Ley 1708 de 2014, denominada Código de Extinción de Dominio.*

*Por mandato expreso del artículo 218 de la última norma en cita, a partir de su entrada en vigencia, la cual tuvo lugar el 20 de enero de 2015, fueron derogadas las Leyes 793 y 785 de 2002, Ley 1330 de 2009, así como todas*



7ª. La propuesta de solución contenida en ese artículo consiste fundamentalmente, en establecer que en cada uno de los procesos existentes se continúen aplicando las causales previstas en la ley cuando el momento de la resolución de inicio. De esa manera, se solucionarían todos los problemas de aplicación de ley en el tiempo que podría haber surgido como consecuencia del tránsito legislativo entre la Ley 793 y la Ley 1453. (Varios ejemplares de la Gaceta del Congreso de la República, especialmente la signada con el No. 174 del 3 de abril de 2013).

Por lo tanto, el aludido régimen de transición solamente está referido a las causales de extinción de dominio legalmente contempladas y aplicadas en la resolución de inicio, y no comprende las restantes instituciones sustanciales o procesales contenidas en las diferentes normas que han regido el tema. En consecuencia, en la actualidad la ley vigente y aplicable a todos los casos es la 1708 de 2014, salvo por las excepciones a las que se ha hecho referencia, dentro de las cuales no se encuentran las disposiciones atributivas de competencia." (Subrayado del Juzgado). (CSJ 2014-46548-2014 rad.46548)

De conformidad con lo anterior, como ya se explicó ampliamente es claro que los procesos de extinción de dominio se rigen actualmente por la Ley 1708 de 2014, pues se trata de la normatividad vigente tras la derogatoria de la Ley 793 de 2002, sin embargo, el régimen de transición establecido que de haberse iniciado el proceso de extinción de dominio con fundamento en una de las causales contenidas en la última norma en cita, se debe seguir aplicando la misma, como ocurre en el caso concreto, en la cual la Fiscalía Demagica está incoando la extinción de dominio con fundamento en la causal contenida en el numeral 3º del artículo 2º de la Ley 793 de 2002 (modificada por el artículo 72 de la Ley 1453 de 2011, la cual prescribe:

"ARTÍCULO 72. CAUSALES DE LA ACCIÓN DE EXTINCIÓN DEL DOMINIO. El artículo 2º de la Ley 793 de 2002 quedará así:

Artículo 2º. Causales. Se declarará extinguido el dominio mediante sentencia judicial, cuando ocurriere cualquiera de los siguientes casos:

(...)



función social y ecológica de la propiedad y la acción se pasa en el artículo 28 constitucional. Finalmente, si concurren los motivos de utilidad pública o interés social legalmente acreditados, hay lugar a la expropiación.

Pues bien; si ello es así cuando la causal tercera del artículo 2º establece la procedencia de la extinción de dominio de los bienes utilizados como medio o instrumento para la comisión de actividades ilícitas, y para lo que aquí interesa, a aquellos que han sido destinados a tales actividades o que correspondan al objeto del delito, lo que nace es conjugar en la norma enunciado normativo las dos modalidades de extinción de dominio a una sola ha hecho referencia, pues en estos supuestos la acción no procede por la legitimidad del título, sino por dedicarse los bienes a actividades que afectan la función social y ecológica de la propiedad. Bien se ve, que esta debe ejercerse de tal manera que se orienta a la generación de riqueza, tanto y a la preservación y restauración de los recursos naturales renovables, y no a la comisión de conductas ilícitas. (Subrayado del Despacho)

Conforme la jurisprudencia en cita y al tenor del artículo 2º de la Ley 1708 de 2014, debe considerarse como "actividad ilícita" toda aquella tipificada como delictiva, independiente de cualquier declaración de responsabilidad penal, así como toda actuación que el legislador considere susceptible de aplicación de la actual normatividad de extinción de dominio por deteriorar la moral social, norma que fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-358 de 2014<sup>25</sup>, en la cual se acotó sobre el tema:

"El actual Código de Extinción de Dominio, Ley 1708 de 2014, objeto del debate en la demanda de la referencia, no liga la moral social o pública al juicio de reproche penal. En la nueva normativa el legislador se refiere a una actividad ilícita, la cual define el numeral 2 del artículo 1º de la citada ley<sup>26</sup>, que da origen a la acción de extinción de dominio, puede adelantarse por (i) la comisión de un delito (independientemente de cualquier declaración de responsabilidad penal) o (ii) conductas que impliquen un grave deterioro de la moral social, concepto que quedó sujeto a los desarrollos normativos y jurisprudenciales en la materia, en atención a la función legislativa, en virtud de la cual el Congreso de la República

<sup>25</sup> MP MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

<sup>26</sup> Actividad ilícita. Toda aquella tipificada como delictiva, independiente de cualquier declaración de responsabilidad penal, así como toda actuación que el legislador considere susceptible de aplicación de esta ley por deteriorar la moral social



as cosas, se observa que el inmueble sobre el que la Fiscalía delegada solicita la acción de extinción de dominio es el siguiente:

Nº	Tipo de bien	Identificación	Dirección	Titular
1	Casa	Matrícula Inmobiliaria Nº 50S-40073703	Diagona 60 Sur No. 3B-12 Este, Barrio Canucio Azul, localidad de Usme, Bogotá D.C.	Esperanza Bejarano Balcarón Propietaria Cédula No. 51312016

Es importante resaltar que en lo que se refiere a la identificación del bien, la misma no ofrece dudas a pesar de que en el expediente se aparecen dos direcciones

Para dilucidar este aspecto en primer lugar se debe tener en cuenta el ya citado folio de matrícula inmobiliaria No. 50S-40073716 en el que se señala que el código catastral es el No. AAA0145TUIEF ubicado en Bogotá y cuya propiedad actual según la anotación No. 4 es la señora Esperanza Bejarano Balcarón. Igualmente, en dicho documento se indica que, la dirección Catastral es la Diagonal 60 sur No. 3B-12 este.

Véase que, dicha dirección coincide con la reportada en la certificación catastral en febrero de 2012, en la que entre otras cosas se precisa que, la matrícula inmobiliaria del bien es la acabada de mencionar; la cédula catastral es la No. 202302160800000000, el chip que le corresponde es el No. AAA0145TUIEF y que su propiedad es la señora Esperanza Bejarano Balcarón<sup>28</sup>.

También se cuenta el último boletín catastral aportedado a la actuación<sup>29</sup>, en el que se señala que la dirección del bien es la Diagonal 62 sur No. 2-70. Situación que a primera vista daría lugar a pensar que se trata de un bien diferente; sin embargo, nótese que entre otros datos claramente deja ver que su cédula catastral es la No. 202302160800000000 el chip que le corresponde es el No.

<sup>28</sup> Folio 3 del cuaderno original 1 de la actuación principal

<sup>29</sup> Folio 186 ibidem



plásticas transparentes contentivas de una sustancia ou refulenta que dio positivo para cocaína una vez efectuada la prueba de identificación preliminar homologada PIPH<sup>12</sup>; por lo que fueron capturadas las señoras Leidy Patricia Laiton Bejarano y Esperanza Bejarano Balcerro, esta última propietaria quien asumió su responsabilidad penal en el delito.

Como es sabido de autos por esos hechos la ciudadana capturada a saber, Esperanza Bejarano Balcerro fue vinculada a un proceso penal por los delitos de Fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego en circuito heterogéneo con Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en el que terminó asumiendo su responsabilidad en los hechos imputados por lo que fue condenada a la pena de 57 meses de prisión por el Juzgado 36 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá mediante sentencia emitida el 27 de julio de 2013<sup>13</sup>.

Es de anotar que, sobre la existencia del expendio se tuvo noticia a través de las quejas de la ciudadanía según lo manifestado por investigadores de la SIC<sup>14</sup> en las que se daba cuenta que las residentes del bien, a saber, Esperanza Bejarano Balcerro y su hija Leidy Patricia Laiton Bejarano, junto con otras dos personas estaban dedicando la casa como sitio de expendio de estupefacientes las 24 horas del día, lo que ha generado gran inseguridad en el sector, cuando algunos consumidores le hurtan sus pertenencias a la gente que pase por ahí, o incluso que se interpuso solicitando a la vez guardar la identidad por temor a represalias. Otras quejas llevaron a que las autoridades realizaran labores de vecario, y de inteligencia en las que se pudo constatar que en el inmueble funcionaba un expendio de sustancias estupefacientes.

De todo lo anterior, fácil es concluir que, la señora Esperanza Bejarano Balcerro de manera dolosa y por demás desafiante con las autoridades y la misma comunidad utilizó a sus anchas su propiedad para comercializar estupefacientes y lucrarse de ello, afectando el bien jurídico de la salud pública y violentando en consecuencia y flagrantemente la función social de la propiedad prevista en el artículo 58 de la Constitución Política; condiciones propias para que se encuentre inmerso en la causal 3ª del artículo 2º de la Ley 1793 de 2002.

<sup>12</sup> Folio 20 ibidem

<sup>13</sup> Folio 110 ibidem

<sup>14</sup> Folio 5 ibidem



la prejudicialidad para impedir que se profiera sentencia. Razones por las que sus argumentos soportados en principios propios del proceso penal no pueden tener acogida en este proceso, por las razones acabadas de exponer.

De otro lado, tampoco puede aceptarse el argumento de que el inmueble fue adjudicado o entregado por el Estado para satisfacer su necesidad de vivienda en desarrollo de programas de interés social, como una circunstancia que impida declarar la extinción del dominio; pues se debe tener en cuenta precisamente que ese derecho implica una obligación prevista en la Constitución Nacional, la cual se reduce a que la propiedad se use debidamente y no en detrimento de la sociedad satisfaciendo intereses personales, máxime cuando es la misma a través de sus gobernantes la que de manera gratuita le garantiza esa necesidad de techo, como ocurrió en el presente caso, en el que la Alcaldía Mayor de Bogotá por intermedio de la Caja de Vivienda Popular se lo cedió a título gratuito con la resolución No. 288 de 20 de abril de 2009<sup>36</sup>.

En ese orden de ideas, es claro que Esperanza Bejarano Balsero le dio un uso lícito al inmueble, dejando de lado el cumplimiento de los fines sociales que debe darse a la propiedad y a la que estaba obligada como propietaria. Tampoco existe prueba alguna que permita señalar que ella ejecutó acciones para mantener el orden en el inmueble; como tampoco de la existencia de alguna situación que efectivamente mermara su capacidad para ejercer de manera efectiva el dominio sobre su bien que le impedirían indirectamente evitar así su indebida destinación por el contrario lo que salta a la vista es que la comercialización de estupefacientes era parte de su *modus vivendi* y el de su familia, en otras palabras, era fuente de ingresos.

Finalmente, frente al argumento recurrente del curador al bien, según el cual no se debe extinguir el dominio del bien objeto de estas diligencias, como quiera que según las anotaciones 5 y 6 del folio de matrícula inmobiliaria No. 016-406737<sup>37</sup> el bien está sometido a las figuras de patrimonio de familia, embargo y de afectación a vivienda familiar a favor de menores, cuyos derechos deben prevalecer sobre los demás, se debe precisar que, en el artículo 47 de la Ley 1733 prevé que la acción de Extingción de Dominio es de naturaleza constitucional, que

<sup>36</sup> Folio 174 de cuaderno original de la actuación principal.





Igualmente, este Despacho declarará la extinción del derecho de dominio del bien inmueble ubicado en la diagonal 60 Sur No. 3B-12 Esta de Bogotá, identificada con la matrícula inmobiliaria No. 0503-40073705, que figure a nombre de la afectada, señora Esperanza Bejarano Balceiro.

De la misma manera, se declarará la extinción de todos los derechos reales, principales o accesorios, desmembraciones, gravámenes o cualquier otra limitación a la disponibilidad o el uso del citado bien, y en consecuencia se dispondrá la cancelación del embargo y consecuente sustanciación de poder dispositivo ordenado por la Fiscalía Delegada en este proceso, y ordenará su tradición a favor de la Nación a través del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado. Para tal efecto, se ordenará oficiar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Sur para los fines pertinentes.

#### 5.7. Otras determinaciones

llama la atención del Despacho el hecho de que según lo informado por la Policía Nacional<sup>39</sup>, para el 20 de abril de 2016 se haya constatado que el bien sigue siendo utilizado para la comercialización y consumo de estupefacientes, a pesar de que el mismo fue dejado a disposición física y material de la entonces Dirección Nacional de Estupefacientes al momento de materializarse la medida cautelar de secuestro<sup>40</sup>, función que fuera asumida por la Sociedad de Activos Especiales –SAE– en virtud de la Ley 1703 de 2014.

Igualmente que, al ser requerida por la Fiscalía Delegada frente a la información mencionada, la Sociedad de Activos Especiales –SAE– simplemente haya respondido que, el bien efectivamente se encuentra en su inventario de bienes y que en la actualidad se trata de un bien improductivo por su difícil administración debido al regular estado en el que se encuentra, según lo informado por el depositario provisional actual, a saber, Asesores Impopacificados solicitando entonces autorización para proceder a su enajenación temprana, sin hacer

<sup>39</sup> Folio 170 ibidem

<sup>40</sup> Folio 72 ibidem



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

Radicación : 11001 31 20 002 2017-082-2  
Afectados : Esperanza Bejarano Balceiro  
Decisión : Extingue dominio

Sentencia No. 004

del poder dispositivo ordenado por la Fiscalía 37 de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos, en el presente proceso.

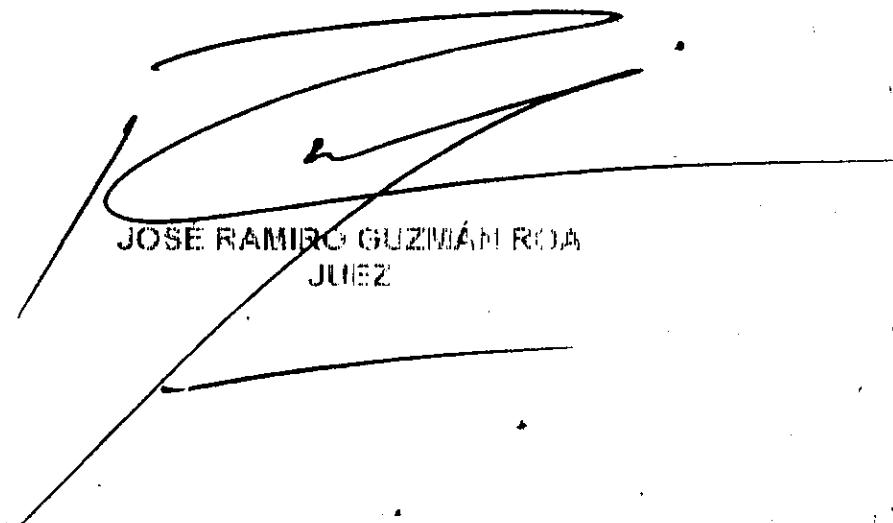
**CUARTO: ORDENAR** la tradición del citado inmueble a favor de la Nación, a través del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado. Para tal efecto **OFICIESE** al Registrador de Instrumentos Públicos de Bogotá – Zona Sur para que dé cumplimiento a lo aquí dispuesto.

**QUINTO: DAR** cumplimiento a lo dispuesto en el acápite de **OTRAS DETERMINACIONES**.

**SEXTO: LÍBRENSE** las comunicaciones de ley.

Contra la decisión adoptada procede únicamente el recurso de apelación, conforme lo prevé el artículo 147 de la Ley 1708 de 2014.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,**

  
JOSE RAMIRO GUZMÁN ROA  
JUEZ